

SOLICITUD DE AYUDA EN MATERIA PENAL

Las cartas rogatorias que se originan en sistemas jurídicos extranjeros se reciben por vía diplomática en el Ministerio de Relaciones Exteriores, órgano que las transmite directamente al Presidente del Tribunal Superior de Justicia (STJ) para que se determine si se concede el exequátur, que es el despacho que ordena la homologación en Brasil de la diligencia judicial que se origina en el extranjero. Los actos judiciales que se transmiten a través de las autoridades centrales también se envían al exequátur del Tribunal Superior de Justicia.

Compete a los jueces federales procesar y juzgar, en primera instancia, la ejecución de la carta rogatoria una vez que el Tribunal Superior de Justicia determina la concesión del exequátur (artículo 109, inciso X, de la Constitución Federal de 1988). Una vez cumplida la rogatoria, se le devuelve al Presidente del Tribunal Superior de Justicia en un plazo de 10 (diez) días, quien a su vez la remite, en ese mismo plazo, a la autoridad judicial de origen, ya sea a través del Ministerio de Justicia o del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Las solicitudes de cooperación en el ámbito jurídico internacional cuyo objeto sean actos que no supongan un juicio probatorio por parte del Tribunal Superior de Justicia (juicio superficial sobre la legalidad de un acto, sin adentrarse en consideraciones de mérito), aún cuando sean catalogados como una carta rogatoria, se remitirán o devolverán al Ministerio de Justicia a efectos de que se tomen las providencias necesarias para que se dé cumplimiento mediante asistencia directa.

Compete al Departamento de Recuperación de Activos y Cooperación Jurídica Internacional (DRCI) del Ministerio de Justicia, entre otras funciones, coordinar la ejecución de la cooperación jurídica internacional, ejercer la función de autoridad central para efectos del trámite de solicitudes de cooperación jurídica internacional, e instruir, opinar y coordinar la ejecución de la cooperación jurídica internacional activa y pasiva.

En consecuencia, el DRCI remite al Centro de Cooperación Jurídica Internacional (CCJI) de la Procuraduría General de la República las solicitudes de cooperación jurídica internacional pasiva en materia penal que estén sujetas a la competencia de la Justicia Federal brasileña y que no sean objeto de deliberación por parte del Tribunal Superior de Justicia, a efectos de que el CCJI proceda a distribuir las solicitudes entre las unidades del Ministerio Público Federal a las que les compete promover judicialmente los actos necesarios en aras de dicha cooperación.

Dependiendo de la naturaleza de la solicitud o pedido, el DRCI podrá remitirlo alternativa o concomitantemente al Departamento de Policía Federal para cumplimiento en el evento de que ulteriormente deban adoptarse medidas en el ámbito policial. Por último, en el caso de actos que, al amparo de la legislación

brasileña, no requieran intervención jurisdiccional, el DRCI podrá remitir la solicitud de asistencia directamente a la autoridad competente para el cumplimiento pertinente.

Brasil no adoptó un formulario rígido al que deban dar cumplimiento las autoridades extranjeras competentes al presentar solicitudes de asistencia judicial al país, si bien deben dar cumplimiento a patrones reconocidos internacionalmente para este tipo de trámite.